

SEÑOR(A)
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
GUADALAJARA DE BUGA

HAROLD MAURICIO LEMOS VASCO, mayor de edad, identificado con C.C. No. 14.891.337 expedida en Buga, abogado titulado, con T.P No. 161.149 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como mandatario judicial del señor **YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA** conforme al poder que anexo, para que me sea reconocida la respectiva personería adjetiva para actuar, por medio del presente escrito me permito presentar **ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contra del **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA**, representado por su Alcalde el señor JHON HAROLD SUÁREZ VARGAS, o quien haga sus veces, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Buga, para que previos los trámites legales me sean concedidas las siguientes:

1. PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos que mas adelante expondré y las disposiciones de derecho que invocaré, previo el cumplimiento de los trámites establecidos en la Parte Segunda Título V del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011-, con citación y audiencia del Municipio de Guadalajara de Buga representado por su Alcalde el señor Jhon Harold Suárez Vargas o quien haga sus veces y del señor Agente del Ministerio Público, solicito se disponga lo siguiente:

1. Que se declare la **NULIDAD** del acto administrativo de fecha 28 de octubre de 2014 radicado con el No. 2014260001230 expedido por el Municipio de Guadalajara de Buga y en su lugar se **RESTABLEZCA EL DERECHO** al señor **YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA**, ordenando al ente territorial antes mencionado que **RECONOZCA Y ORDENE** pagar al señor **YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA**, los valores adeudados por concepto del **SOBRESUELDO** acordado entre ese MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

INPEC, en el convenio interadministrativo de fecha septiembre 20 de 1.994.

2. Que se **ORDENE** al Municipio de Guadalajara de Buga, que en la liquidación se tenga en cuenta la asignación mensual vigente para cada año devengada por el señor Durán Ortega y en forma actualizada, conforme al índice de precios al consumidor, para lo cual se debe de aplicar la siguiente fórmula: **$R= Rh \text{ índice final} / \text{índice inicial}$** , en donde *R* es el valor presente que se determina aplicando el valor histórico (*Vh*) que es lo dejado de percibir por el señor YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA por concepto de sobresueldo, desde el 13 de febrero de 2006, hasta la fecha de la sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE, por el índice inicial vigente para el 13 de febrero de 2006.
3. Que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula debe aplicarse separadamente mes por mes para cada sobresueldo, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de causación de cada una de ellos y que corresponde a los períodos que a continuación se relacionan, incluyendo aquellos que se causen durante el tiempo que demore la correspondiente liquidación.
4. Que los periodos y los correspondientes valores por sobresueldo adeudados al señor YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA conforme a la certificación de las asignaciones mensuales devengadas –se anexa copia- al 31 de diciembre de 2014, corresponden a los siguientes:

PERÍODOS	MESES	ASIGNACIÓN MENSUAL	20% SOBRESUELDO	TOTAL SOSBRESUELDO
De febrero 13 a diciembre 31 de 2006	10 meses y 17 días	1.402.834.04	280.566.80	2.964.655.85
De enero 1ª a diciembre 31 de 2007	12	1.466.917.01	293.383.40	3.520.600.82
De enero 1º a diciembre 31 de 2008	12	1.551.694.74	310.338.94	3.724.067.37
De enero 1º a diciembre 31 de 2009	12	1.670.792.61	334.158.52	4.009.902.26

De enero 1° a diciembre 31 de 2010	12	1.705.224.65	341.044.93	4.092.539.16
De enero 1° a diciembre 31 de 2011	12	1.759.437.10	351.887.42	4.222.649.04
De enero 1ª a diciembre 31 de 2012	12	1.848.425.54	369.685.10	4.436.221.20
De enero 1° a diciembre 31 de 2013	12	1.912.380.68	382.476.13	4.589.713.63
De enero 1° a diciembre 31 de 2014	12	1.968.036.50	393.607.30	4.723.287.60
TOTAL				36.283.636.93

5. Que el total a cancelar al señor YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA por concepto de sobresueldo al 31 de Diciembre de 2014 asciende a la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES PESOS M/cte., valor al cual se le debe adicionar aquellos sobresueldos que se causen con posterioridad la fecha mencionada, además de la correspondiente indexación.
6. Que se **CONDENE EN COSTAS** al Municipio de Guadalajara de Buga, representado por su Alcalde el señor JHON HAROLD SUÁREZ VARGAS.
7. Que se **CONDENE** al Municipio de Guadalajara de Buga, al pago de los intereses moratorios que se causen a partir de la ejecutoria de la sentencia.

2. LOS HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES

1. Desde el día 13 de febrero de 2006 el señor YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA viene prestando sus servicios en el cargo de Dragoneante del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC de la ciudad de Guadalajara de Buga.
2. El artículo 17 de la Ley 65 de 1993, dispone lo siguiente:

“ARTICULO 17. CÁRCELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. *Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.*

(.....)

En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios.

(.....)

La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.” (resaltado fuera de texto)

Conforme a la anterior disposición se desprende que los Municipios no solamente tenían a su cargo las personas condenadas por contravenciones policivas, sino también aquellas personas detenidas preventivamente por ordenes impartidas por autoridades diferentes a las Municipales; de modo que al referirse el precepto a las personas detenidas preventivamente de manera “*genérica*”, esa obligación abarcaba no solamente a las personas detenidas por contravenciones policivas sino también a las detenidas preventivamente por otras conductas de competencia distinta a la de las autoridades policivas, pues resulta suficiente que sean detenidas preventivamente.

3. Ahora bien, en el caso de que los municipios carezcan de cárceles y para suplir la obligación impuesta en la norma antes citada, el artículo 19 de la Ley 65 de 1993, preceptúa lo siguiente:

“ARTICULO 19. RECIBO DE PRESOS DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES. *Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo*

*que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios **hagan del pago** de los siguientes servicios y remuneraciones:*

- a) ***Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión.***”(.....)(resaltado fuera de texto)

Como puede verse, las normas en mención, contemplan la posibilidad de celebrar “*convenios de integración de servicios*” entre la Nación y las entidades territoriales, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario; permitiendo a su vez, la viabilidad que en tales convenios interadministrativos y en el evento de que las entidades territoriales carezcan de sus respectivas cárceles, se pacte con el INPEC para que reciba a todas aquellas personas que hayan sido **detenidas preventivamente** y como contraprestación, los Municipios se comprometen al pago de una serie de obligaciones entre las cuales se destaca la “*fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento carcelario*”.

4. Como quiera que el Municipio de Guadalajara de Buga carece de su respectiva cárcel y en atención a las anteriores disposiciones, entre el ente mencionado y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, el día 20 de Septiembre de 1994 se celebró un “**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**”, cuyo objeto se fijó así: “*LA NACION – INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”, se hará cargo del recibo en la cárcel del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, de los distintos procesados y condenados que envíen las autoridades municipales de esta ciudad y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 259 de 1938 y la **Ley 65 de 1993**, a cargo del Municipio.*” –se anexa copia-

5. Por su parte, el Municipio de Guadalajara de Buga, contrajo la obligación de reconocer y pagar a los empleados civiles y del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional de la Cárcel del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, **un valor equivalente al 20% de la asignación mensual que actualmente devenguen o de las que llegaren a devengar en virtud a las normas posteriores,**

comprometiéndose a girar dentro de los 10 primeros días de cada mes a la pagaduría de la cárcel del Distrito Judicial de Buga, los dineros correspondientes a este 20%.

6. La administración municipal de forma clara reconoce nuevamente la obligación derivada del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO al expresar en el artículo segundo de la resolución DAM-115 del año 2001 *–cuya copia se acompaña con este escrito de demanda- “reconocer y ordenar pagar a favor del personal administrativo y de custodia y vigilancia de la Cárcel del Distrito Judicial de Buga - Valle, el valor del 20% sobre sus asignaciones diarias por concepto de sobresueldo liquidados, según las respectivas nóminas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta Resolución..... con cargo al rubro No. 08013002008 convenio INPEC de la vigencia fiscal 2001”*
7. El Municipio aludido en cumplimiento de las cláusulas SEXTA Y NOVENA del citado convenio interadministrativo, ha incluido en su presupuesto anual partidas suficientes y necesarias para hacer efectivo el pago de los dineros correspondientes al sobresueldo acordado para el personal del establecimiento carcelario de Buga, en cuantía equivalente al 20% de las asignaciones que devengan; sin embargo, esos dineros no han sido colocados a disposición del Centro Penitenciario y Carcelario de Buga para efectos de cancelar el pago del sobresueldo acordado y que corresponde a los meses que mas adelante se relacionaran.
8. En la CLAUSULA QUINTA del convenio se estipuló que la duración del convenio es por dos (2) años a partir del 1° de enero de 1994 y actualmente se encuentra vigente, toda vez que se ha prorrogado automáticamente por períodos de dos (2) años en las mismas condiciones inicialmente pactadas y así sucesivamente, sin que ninguna de las partes mediante escrito dirigido a la otra, por lo menos con dos (2) meses de anticipación a la fecha de su vencimiento, haya expresado su voluntad de darlo por terminado.

Es así como lo ratifica la administración municipal en el mes de abril del año 2001, en los considerandos de la Resolución No. DAM-115 del 25 de abril de 2001 numeral 5° al expresar *“Que el convenio antes suscrito se encuentra en plena vigencia, toda vez que ha sido desde su suscripción, prorrogado automáticamente tal y como se describe en la cláusula quinta*

del documento, por períodos de dos años, ya que ninguna de las dos partes ha manifestado por escrito con anticipación a los dos meses, su intención de terminarlo.”

9. De la misma manera, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, mediante oficio 200-DROCC-33765-GDC-0497 de agosto 3 de 2009, informa que el convenio interadministrativo se encuentra vigente teniendo en cuenta que las partes desde el 20 de septiembre de 1994 a la fecha, no han manifestado su terminación, ni bilateral ni unilateralmente. – *se anexa copia-*
10. Igualmente mediante el oficio en mención, el INPEC informa que el Municipio de Buga ha negado sistemáticamente la obligación del convenio, y que el Municipio realizó el pago del sobresueldo a los empleados Administrativos y de Custodia y Vigilancia ininterrumpidamente hasta el 30 de junio de 1997; que en el mes de abril de 2001 el Municipio pagó los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 1.999.
11. Como si lo anterior fuera poco, también el Jefe de Talento Humano del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Guadalajara de Buga, mediante documento de fecha febrero 12 de 2015 – *se anexa copia-* ratifica lo anterior y nuevamente certifica que el convenio interadministrativo celebrado el 20 de septiembre de 1994 con el Municipio de Guadalajara de Buga continúa vigente y que en la actualidad dicho Municipio adeuda al señor YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA, por concepto de SOBRESUELDO, los siguientes períodos:

PERIODOS	MESES
De febrero 13 a diciembre 31 de 2006	(10) diez meses y (17) días
De enero 1° a diciembre 31 de 2007	(12) doce meses
De enero 1° a diciembre 31 de 2008	(12) doce meses
De enero 1° a diciembre 31 de 2009	(12) doce meses
De enero 1° a diciembre 31 de 2010	(12) doce meses
De enero 1° a diciembre 31 de 2011	(12) doce meses
De enero 1° a diciembre 31 de 2012	(12) doce meses

De enero 1° a diciembre 31 de 2013	(12) doce meses
De enero 1° a diciembre 31 de 2014	(12) doce meses

12. El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Guadalajara de Buga, nunca hizo efectiva la facultad consagrada en el párrafo 1° de la CLAUSULA TERCERA del convenio ya referido, cual es la de abstenerse de recibir personas detenidas preventivamente o con medida de aseguramiento, hasta tanto el Municipio cumpla con sus obligaciones. Por ende, hasta la fecha el INPEC viene recibiendo personas que se encuentran en esa situación.
13. Al señor YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA, el Municipio de Guadalajara de Buga no le ha cancelado el sobresueldo con ocasión del convenio interadministrativo antes mencionado y que corresponde a los periodos y meses anteriormente relacionados, tal como se evidencia en la certificación de fecha febrero 12 de 2015 expedida por la Coordinadora del grupo de nomina del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Guadalajara de Buga valle, *-cuya copia se acompaña con éste escrito de demanda-* en la cual no aparece que el señor antes mencionado haya recibido en esos periodos el sobresueldo a que alude el artículo 19 de la Ley 65 de 1993, estipulado en el convenio interadministrativo tantas veces mencionado.
14. El SOBRESUELDO acordado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO celebrado entre el Municipio de Guadalajara de Buga y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC el día 20 de Septiembre de 1.994, corresponde a aquel que establece el artículo 19 de la Ley 65 de 1993 y es totalmente distinto al sobresueldo contemplado en el Decreto 1302 de 1978 artículos 2° y 3° y Ley 32 de 1986 artículo 84 que se refiere a la contraprestación que reciben los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, por laborar y estar disponibles durante todo el tiempo que lo requieran las necesidades propias del servicio.
15. Mediante escrito de fecha octubre 23 de 2014 suscrito por el apoderado judicial del señor YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA, recibido por la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga el día 24 de octubre de 2014, se solicitó el reconocimiento y pago del sobresueldo antes mencionado,

solicitud que fue **NEGADA** a través del **acto administrativo de fecha 28 de octubre de 2014 radicado con el No. 201426000123051** por considerar que la petición versa sobre los mismos hechos y pretensiones de otras solicitudes realizadas años atrás por miembros del INPEC, motivo por el cual se ratifica en la respuesta dada en el oficio DJ-002-01-0870-05 del 21/09/2005 en el cual se indicó que una vez que entró en vigencia la Ley 228 de 1995, en la cárcel de la ciudad de Buga no se encuentra reclusa persona alguna por orden del Alcalde o Inspector, por cuanto estos perdieron competencia para conocer de los asuntos relacionados con las contravenciones especiales por haber pasado a la Fiscalía General de la Nación –se anexa copia del mencionado oficio-. Finalmente expresa que se atiene a lo que manera individual y concreta decida en Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

16. Mediante apoderado judicial, el señor YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 24 de noviembre de 2014, convocando al MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA; audiencia celebrada el 02 de febrero de 2015, fecha en que no comparecieron los apoderados judiciales de la parte convocante ni de la entidad convocada, no obstante el apoderado judicial de la parte convocante justificó dentro del termino legal de los tres (3) días su no comparecencia, en tanto que el apoderado judicial de la parte convocada no lo hizo, motivo por el cual la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos de la ciudad de Cali (V), consideró que ante la no justificación de la parte convocada, no existía animo conciliatorio y dio por agotada la etapa conciliatoria, tal como se evidencia en la constancia de fecha febrero 06 de 2015 expedida dentro de las diligencias con Radicación No. 444-415805 de noviembre 24 de 2014. –se anexa copia-

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO, DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE SU VIOLACIÓN

LEY 65 DE 1993, Arts. 17 y 19

Al adoptarse el Código Penitenciario y Carcelario, mediante el artículo 17 el legislador estipuló la obligación a los entes territoriales de crear, dirigir,

organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles para las personas detenidas preventivamente y para tal fin la norma dispone que los municipios deben de incluir en los presupuestos, las partidas necesarias. En efecto tal disposición preceptúa:

“ARTICULO 17. CÁRCELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. *Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.*

(.....)

En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios.

(.....)

La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.” (resaltado fuera de texto)

A su vez, también la Ley 65 de 1993 dispone que en el caso en que los entes territoriales carezcan de cárceles, estos pueden celebrar acuerdos con el INPEC para el recibo de los internos, bajo las condiciones que consagra el artículo 19 el cual prevé lo siguiente:

“ARTICULO 19. *Los Departamentos o Municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán celebrar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los Departamentos o Municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones:*

1. ***Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión;***
2. *Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales.*
3. *Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos.*
4. *Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son de propiedad de los departamentos y municipios.*

Parágrafo. *Las cárceles municipales podrán recibir presos nacionales en las mismas condiciones en que los centros de reclusión nacionales reciben presos municipales.”*

El acto administrativo de fecha 28 de octubre de 2014 radicado con el No. 201426000123051 es violatorio de las anteriores disposiciones, por cuanto si bien es cierto el artículo 85 de la Ley 32 de 1986 que consagraba la prima extra carcelaria y que correspondía a la misma denominación del sobresueldo contemplado en el Decreto 259 de 1938 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia mediante fallo del 26 de junio de 1990, también es cierto que el convenio interadministrativo antes mencionado, no solamente se encuentra sustentado en el Decreto 259 de 1938, ***sino también en los artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1.993***, disposiciones éstas que aún se encuentran vigentes por cuanto no han sido declaradas inexecutable por la Corte Constitucional.

Así las cosas, no existe duda en cuanto a que las cárceles son destinadas a las personas que han sido detenidas preventivamente y no a las condenadas por contravenciones por orden de autoridad policiva. Si bien es cierto que en la actualidad la autoridades de policía perdieron competencia al respecto, también es cierto que ello no implica que las entidades territoriales por ese hecho ya no tienen a su cargo los establecimientos dirigidos a las personas detenidas preventivamente por conductas investigadas por la Fiscalía General de la Nación, por cuanto la ley de ninguna manera les ha suprimido tal obligación.

Ley 1709 de 2014 parágrafo 2º Art. 10 y 12.

El parágrafo 2º del artículo 10 de la Ley 1709 de 2014 que adicionó el artículo 19A a la Ley 65 de 1993, indica de manera clara y precisa que las cárceles

están destinadas a las personas detenidas preventivamente –sin discriminación alguna- y es mas, tal disposición despeja cualquier duda al respecto al preceptuar de manera expresa que “Para efectos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993 **se entenderá que las cárceles departamentales y municipales serán destinadas a las personas detenidas preventivamente.**” (resaltado fuera de texto)

Como si lo anterior fuera poco, el artículo 12 de la mencionada Ley 1709 de 2014 que modificó el artículo 21 de la Ley 65 de 1993 reitera que las cárceles están destinadas a la atención de las personas detenidas preventivamente, las cuales están a cargo de las entidades territoriales al precisar que “Las cárceles y pabellones de detención preventiva son establecimientos con un régimen de reclusión cerrado. **Estos establecimientos están dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva en los términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993, los cuales están a cargo de las entidades territoriales.**” (resaltado y subrayado fuera de texto)

Como puede verse, el pluricitado acto administrativo es violatorio de las anteriores normas, ya que tales disposiciones son claras en cuanto a que las obligaciones que tienen los entes territoriales respecto de las cuales expresamente se refieren los artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1993, no han desaparecido del ordenamiento jurídico, pues así lo confirman las recientes normas tal como quedo visto.

Por ende, es viable que dentro de la órbita de autonomía que tienen los Municipios, pueden estos acordar con el INPEC, para que en el evento en que no posean cárceles como en el caso del Municipio de Guadalajara de Buga, ***se reciban a las personas detenidas preventivamente*** bajo las condiciones que para tal fin contempla el artículo 19 de la Ley 65 de 1993 antes transcrito, ***siempre y cuando se celebre convenio interadministrativo*** en el cual se contemple entre otras obligaciones, el reconocimiento y pago de sobresueldos a los empleados del respectivo centro de reclusión del lugar en donde los internos sean recibidos.

Por ende no tiene ningún asidero legal lo expuesto por el Municipio de Guadalajara de Buga en el acto administrativo tantas veces mencionado, por cuanto los artículos 17 y 19 de la Ley 95 de 1993 en los que se sustentó el convenio interadministrativo celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC con el Municipio de Guadalajara de Buga el día 20 de septiembre de 1994, se encuentran vigentes, máxime si se tiene en cuenta que la Ley 1709 de 2014 ratifica las obligaciones que tienen los entes territoriales conforme a los artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1993, pues el artículo 10 de la Ley 1709 de 2014 preceptúa que hasta tanto no se apruebe un documento Conpes para garantizar la financiación de las obligaciones contenidas en los artículos 17 a 19 de la Ley 65 de 1993, tales obligaciones continúan a cargo de las entidades territoriales tal con lo indica de manera expresa la norma al precisar que: *“El Ministerio de Justicia y del Derecho promoverá la aprobación de un documento Conpes para **garantizar las obligaciones contenidas en los artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1993 y que están a cargo de las entidades territoriales.**”*, (resaltado y subrayado fuera de texto)

Por manera que el Municipio de Guadalajara de Buga no puede sustraerse al cumplimiento de las obligaciones contraídas en el pluricitado acuerdo, bajo el argumento de que dicho convenio es inoperante, toda vez que la norma que se acaba de citar corrobora que las obligaciones contenidas en los artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1993 ***están a cargo de las entidades territoriales*** y desde luego comprenden aquellas contraídas con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a través de convenios administrativos y que se encuentren pactadas como acontece con el pago de sobresueldos al personal del respectivo centro penitenciario.

5. PRUEBAS

- Acto administrativo de fecha 28 de octubre de 2014 radicado con el No. 201426000123051 expedido por la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga.
- Copia del oficio DJ-002-01-0870-05 del 21/09/2005 expedido por el Municipio de Guadalajara de Buga. –se desconoce el lugar en donde se encuentra el original-
- Copia del convenio interadministrativo de fecha 20 de septiembre de 1994. –se desconoce el lugar en donde se encuentra el original-

- Copia de la resolución No. DAM 115 de abril 25 de 2001. *–se desconoce el lugar en donde se encuentra el original–*
- Copia del oficio 200-DROCC-33765-GDC-0497 de agosto 3 de 2009. *–se desconoce el lugar en donde se encuentra el original–*
- Certificación de fecha febrero 12 de 2015 expedida por el Jefe de Talento Humano del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Guadalajara de Buga.
- Certificado de salarios y tiempo de servicio del señor YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA de fecha febrero 12 de 2015, expedido por la Coordinadora del grupo de nomina del Establecimiento Penitenciario de mediana seguridad Carcelario de Guadalajara de Buga.

6. ANEXOS

Con la presente demanda me permito anexar los siguientes documentos:

➤ **Poder**

Memorial poder otorgado por YEISON ANDRES DURÁN ORTEGA.

➤ **Requisito de procedibilidad.**

Para acreditar que se ha agotado el requisito de procedibilidad exigido en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 en concordancia con lo establecido por el artículo 37 de la Ley 640 de 2001, me permito anexar copia de la constancia de fecha febrero 06 de 2015 expedida por la Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos, dentro de las diligencias adelantadas bajo el radicado No. 444-415805 de noviembre 24 de 2014.

➤ **Traslado**

Para efectos del traslado de la contestación a la demanda, me permito allegar sendas copias de la demanda con sus respectivos documentos y anexos, tanto para la parte demandada MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA como para el MINISTERIO PÚBLICO.

Igualmente me permito anexar un CD que contiene el archivo Word de la presente demanda.

7. CUANTÍA

Las aspiraciones de mi poderdante a la fecha de la presentación de la demanda las estimo en la suma de \$ **36.283.636.93** mas la indexación correspondiente desde que las obligaciones se hicieron exigibles, además de los sobresueldos que se vayan causando en forma mensual, por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo.

8. NOTIFICACIONES

La parte demandante y su apoderado recibirán notificaciones en la Carrera 14 No. 5-53 Oficina 403 de la ciudad de Guadalajara de Buga, teléfono 3178020320 y a través del Correo electrónico: hmlv1967@hotmail.com

La parte accionada, el MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, recibirá notificaciones personales a través del Alcalde Municipal JHON HAROLD SUAREZ VARGAS, o por quien haga sus veces, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales según el artículo 197 y siguientes del CPACA.

Atentamente,

HAROLD MAURICIO LEMOS VASCO

C.C. No. 14.891.337 de Buga.

T.P. No. 161.149 del C.S. de la Judicatura.